

Nicaragua: del sueño de la revolución al autoritarismo

Nicaragua después de 2018: autoritarismo, violaciones sistemáticas de derechos humanos y la ficción de la estabilidad

Lia Gabriela Ruiz Montes

Durante los años previos a 2018, Nicaragua fue presentada como un ejemplo de estabilidad económica en Centroamérica. El país registró tasas de crecimiento superiores al 4 % durante casi una década, reducción de indicadores de pobreza y un entorno favorable para la inversión. Sin embargo, esta aparente estabilidad se sostuvo sobre un proceso paralelo de erosión democrática profunda. La concentración del poder en el Ejecutivo, el control partidario de todas las instituciones del Estado y la eliminación de los contrapesos democráticos configuraron un régimen autoritario que priorizó la gobernabilidad económica por encima de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El modelo político nicaragüense se estructuró alrededor de un esquema de concertación económica con el sector privado, mientras el gobierno-partido consolidaba el control absoluto de la institucionalidad democrática: el sistema electoral, el poder judicial, la Asamblea Nacional y los cuerpos de seguridad. Este diseño permitió neutralizar cualquier forma de oposición real y construir una legalidad funcional al régimen. Bajo el discurso de una “democracia cristiana, socialista y solidaria”, se institucionalizó un sistema que restringió progresivamente el ejercicio de derechos civiles y políticos, normalizando la represión como mecanismo de control social.

La crisis sociopolítica de 2018 fue el punto de quiebre de este modelo. Lejos de ser un hecho aislado, el estallido fue el resultado de un acumulado de exclusión política, cierre del espacio cívico y represión selectiva que ya venía desarrollándose desde años anteriores. Las protestas de marzo y abril de 2018 —motivadas por intentos de control sobre la libertad de expresión, la inacción estatal ante el incendio en la reserva Indio Maíz y, finalmente, la reforma al sistema de seguridad social— revelaron la ruptura definitiva entre el Estado y amplios sectores de la sociedad.

La respuesta del régimen fue inmediata y desproporcionada. A partir de abril de 2018, el Estado desplegó una estrategia represiva que puede dividirse en cuatro fases: la represión abierta contra manifestaciones pacíficas; la llamada “Operación Limpieza”, ejecutada conjuntamente por la Policía Nacional y grupos armados paraestatales; una etapa de persecución selectiva contra líderes sociales, estudiantes, periodistas y defensores de derechos humanos; y, finalmente, la consolidación de un Estado policial que prohíbe de facto cualquier forma de protesta o disidencia pública.

Este proceso evidenció la naturaleza autoritaria del régimen y su disposición a utilizar la violencia estatal y paraestatal como herramienta central de gobierno. Organismos internacionales de derechos humanos documentaron ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, violencia sexual durante detenciones, desapariciones forzadas y juicios sin garantías procesales. En los primeros meses de la crisis, más de 325 personas fueron asesinadas, miles resultaron heridas y al menos 1300 fueron detenidas ilegalmente hasta el día de hoy. La estigmatización pública de las víctimas —calificadas oficialmente como “terroristas”, “golpistas” o “enemigos de la patria”— formó parte de una estrategia deliberada de criminalización de la protesta.

Las violaciones a los derechos humanos no fueron hechos aislados ni excesos individuales, sino prácticas sistemáticas y generalizadas. Se documentaron graves transgresiones al derecho a la vida, la libertad personal, la integridad física y psicológica, la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho a un debido proceso, el derecho a la educación y el derecho a la seguridad social. El sistema judicial dejó de funcionar como garante de derechos y se convirtió en un instrumento de persecución política, legitimando detenciones arbitrarias y condenas sin pruebas.

En este contexto, el autoritarismo se consolidó no solo mediante la represión directa, sino también a través del miedo. La ocupación permanente del espacio público, la prohibición de manifestaciones, el asedio policial y la vigilancia constante generaron un clima de control social que inhibió la participación ciudadana y normalizó la autocensura. Nicaragua pasó de ser un país con libertades restringidas a una sociedad cerrada, donde el ejercicio de derechos básicos implica un alto riesgo personal.

Nicaragua: del sueño de la revolución al autoritarismo

Una de las consecuencias más visibles y devastadoras de este modelo autoritario ha sido la migración forzada masiva. Desde 2018, entre 800,000 y 1,000,000 de nicaragüenses han salido del país, lo que representa entre el 12 % y el 15 % de la población. Este éxodo incluye a personas directamente perseguidas por razones políticas, pero también a estudiantes, profesionales, trabajadores del Estado y familias enteras que huyen del miedo, la precarización económica y la ausencia total de garantías. La migración se ha convertido así en una válvula de escape ante un sistema que expulsa a quienes no se someten o no encuentran condiciones mínimas para vivir con dignidad.

La crisis nicaragüense plantea escenarios de salida limitados y complejos. Una solución negociada requeriría presión internacional sostenida, restitución de libertades fundamentales, liberación de presos políticos, retorno de organismos internacionales de derechos humanos y reformas estructurales que permitan elecciones libres y transparentes. Sin estas condiciones, el régimen continuará administrando la crisis mediante represión, exilio y control autoritario.

La experiencia de Nicaragua demuestra que la estabilidad económica sin democracia es una ficción peligrosa. Cuando un Estado sacrifica los derechos humanos, la legalidad y la participación política en nombre del orden y el crecimiento, el resultado no es estabilidad, sino violencia estructural, autoritarismo y exilio. Nicaragua después de 2018 no es solo una crisis nacional: es una advertencia regional sobre los costos humanos y políticos de normalizar el autoritarismo.